Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México; de **once (11) de diciembre de dos mil veinticuatro**

**VISTO** el expediente electrónico formado con motivo del recurso de revisión  **03348/INFOEM/IP/RR/2024**,promovido por **XXXXXXXXXXX,** a quien en lo sucesivo se le identificará como **EL RECURRENTE**, en contra de la respuesta del **Ayuntamiento de Toluca,** en lo sucesivo el **SUJETO OBLIGADO**, se procede a dictar la presente resolución, con base en los siguientes:

# **ANTECEDENTES**

# **SOLICITUD**

1. El **siete de mayo de dos mil veinticuatro,** se presentó ante el **SUJETO OBLIGADO** a través del SAIMEX, la solicitud de información pública registrada con el número **01067/TOLUCA/IP/2024;** mediante la cual se solicitó la siguiente información:

*“solicito el soporte documental que me de cuenta del estatus de conclusión y archivo de la denuncia a XXXXXXXXX por acoso, perteneciente al ayuntamiento de toluca como secretario del ayuntamiento en la administración 2019-2021 o en su caso el estatus de dicha denuncia” (Sic)*

* Se eligió como modalidad de entrega de la información: A través del **SAIMEX.**

# **RESPUESTA**

1. El **veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro,** el **SUJETO OBLIGADO,** dio respuesta a través del siguiente archivo:

* [***Respuesta 01067\_24.pdf***](https://saimex.org.mx/saimex/solicitud/downloadAttach/2118527.page)

Oficio de veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro, firmado por la Titular de la Unidad de Transparencia, quien informo que la Contraloría Municipal y Servidor Público Habilitado, en atención a la solicitud de información informo que “*no se encontró registro de denuncia por acoso de investigación de Responsabilidades Administrativas, no se encontró registro de denuncia por acoso en cuanto al mencionado, motivo por el cual no es posible proporcionar la información que solicita”*

# **INCONFORMIDAD**

1. Inconforme con lo anterior, el **veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro**, el hoy **RECURRENTE,** interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el **SUJETO OBLIGADO**, manifestando las siguientes razones o motivos de inconformidad:

* **Acto impugnado:** *“**la respuesta”*
* **Razones o Motivos de inconformidad: “***no me entregan lo solicitado, no turnan a todas las áreas correspondientes la solicitud, ni realizan una búsqueda congruente y/o exhaustiva, la documental existe pero no se quiere entregar*”

# **MANIFESTACIONES**

1. La Comisionada Ponente con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185 fracción II de la ley de la materia, a través del acuerdo de admisión notificado el **tres de junio de dos mil veinticuatro**, puso a disposición de las partes el expediente electrónico vía **SAIMEX** a efecto de que en un plazo máximo de siete días manifestaran lo que a su derecho conviniera, ofrecieran pruebas y alegatos según corresponda a los casos concretos, y el **SUJETO OBLIGADO** presentará el Informe Justificado procedente.
2. El **SUJETO OBLIGADO,** rindió informe justificado por medio del archivo *3348.pdf****,*** mismo que se puso a la vista de las partes el **cinco de diciembre de dos mil veinticuatro,** por medio del cual ratifico su respuesta primigenia.
3. El **PARTICULAR** fue omiso en realizar manifestación alguna que a su derecho conviniera.
4. El **dieciocho de junio de dos mil veinticuatro,** se amplió el término para resolver; al respecto es menester realizar las siguientes precisiones.

* **De previo y especial pronunciamiento. Argumentos a considerar en las resoluciones a los recursos de revisión para justificar los fallos emitidos fuera del plazo legal de 45 días.**

1. Este organismo garante no pasa por alto justificar, que la dilación en la resolución del presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión recibidos dentro del primer semestre del año dos mil veintitrés, que, en comparación con los recibidos el año pasado dentro del mismo periodo, se ha incrementado aproximadamente un 400% el número de medios de impugnación que deben resolverse por este Instituto, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.
2. Por ello, es menester precisar que, si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, dicha dilación es de carácter excepcional y se encuentra justificada en los elementos para medir la razonabilidad del plazo de resolución de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.
3. Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.
4. En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.
5. Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad de dicha dilación atendiendo a los siguientes criterios:
6. Complejidad del Asunto: La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.
7. Actividad Procesal del interesado. Acciones u omisiones del interesado.
8. Conducta de la Autoridad: Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.

d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso: Violación a sus derechos humanos.

1. De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.
2. Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro *“TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ* INDEBIDAMENTE *POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”*, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.
3. Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.
4. Por ello, este organismo garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional.
5. Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

*“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.”* consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

*“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.”*, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.”

1. Finalmente, mediante acuerdo de **once de diciembre de dos mil veinticuatro,** se decretó el cierre de instrucción, por lo que no habiendo más que hacer constar, y------------------------------------------------------------------------------------------

**CONSIDERANDO**

## **PRIMERO. De la competencia**

1. Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver del presente recurso de conformidad con el artículo: 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 1, 2 fracción II, 13, 29, 36 fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y 7, 9 fracciones I y XXIV, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

## **SEGUNDO. De la oportunidad y procedencia.**

1. El medio de impugnación fue presentado a través del **SAIMEX,** en el formato previamente aprobado para tal efecto y dentro del plazo legal de quince días hábiles otorgados; para el caso en particular es de señalar que el **SUJETO OBLIGADO** entregó su respuesta el **veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro**, de tal forma que el plazo para interponer el recurso de revisión transcurrió del **veintinueve de mayo al dieciocho de junio de dos mil veinticuatro**; en consecuencia, el ahora **RECURRENTE** presentó su inconformidad el **veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro**; es decir, el mismo día en que se dio respuesta por lo que se estima que la inconformidad se presentó dentro del lapso legalmente establecido para tal efecto.
2. Por otro lado, el escrito contiene las formalidades previstas por el artículo 180 último párrafo de la Ley de la materia actual, por lo que es procedente que este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, conozca y resuelva el presente recurso.

# **TERCERO.** **Del planteamiento de la *Litis*.**

1. Se solicitó tener acceso, a la información que a continuación se desagrega:

Soporte documental que dé cuenta del estatus de conclusión y archivo de la denuncia a XXXXXXXXXXX por acoso, perteneciente al ayuntamiento de Toluca como secretario del ayuntamiento en la administración 2019-2021 o en su caso el estatus de dicha denuncia.

1. En respuesta, el **SUJETO OBLIGADO**, informo que una vez realizada la búsqueda exhaustiva no se encontró la información solicitada.
2. En la etapa de manifestaciones el **SUJETO OBLIGADO** vía informe justificado confirmo su respuesta primigenia.

1. En dichas condiciones, la *Litis* a resolver en este recurso se circunscribe a determinar si se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 179, **fracción I** de la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de** México **y** Municipios; fracción que determina la hipótesis jurídica relativa a La negativa a la información solicitada; contexto del cual se dolió **EL RECURRENTE** al momento de interponer su inconformidad.
2. De modo tal que el presente recurso de revisión se abocara en determinar si el **SUJETO** **OBLIGADO** con su respuesta ciertamente actualiza la causal de procedenciaantes señalada.

## **CUARTO. Del estudio y resolución del asunto.**

1. Acotada la *Litis* del presente asunto, en atención a la fuente obligacional, dentro Manual de Organización de la Secretaría del Ayuntamiento, se advierte lo siguiente:

***VII. ESTRUCTURA ORGÁNICA***

*2010A0000 Secretaría del Ayuntamiento*

*(…)*

*201010000 Consejería Jurídica*

*(…)*

***201012000 Coordinación Jurídica***

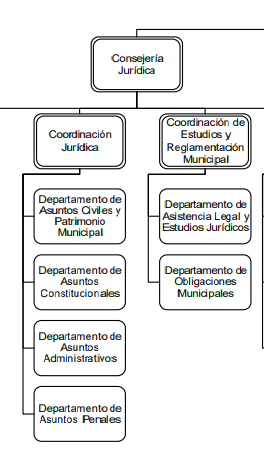
*201012001 Departamento de Asuntos Civiles y Patrimonio Municipal*

*201012002 Departamento de Asuntos Constitucionales*

*201012003 Departamento de Asuntos Administrativos*

*201012004 Departamento de Asuntos Penales*

***ORGANIGRAMA***



*B. COORDINACIÓN JURÍDICA*

*Artículo 3.16. La o el titular de la Coordinación Jurídica tendrá las siguientes atribuciones:*

*I. Coadyuvar como apoderado jurídico del Ayuntamiento de Toluca, del presidente*

*(…)*

***IX. Atender las quejas y denuncias de carácter oficial en contra de las o los integrantes del Ayuntamiento o servidores públicos municipales, cuando se presenten ante las instancias de procuración de justicia;***

*(…)*

1. De lo anterior, se observa que existen otras áreas, que de manera enunciativa, más no limitativa, como lo es la Coordinación Jurídica dependiente de la Consejería Jurídica, quien pudiera generar, poseer y/o administrar la información solicitada.
2. Al respecto de la información solicitada, se precisa lo siguiente:
3. Al respecto, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el procedimiento penal ordinario comprenderá las siguientes fases:

*“****I.*** *La de investigación, que comprende las siguientes fases:*

***a)*** *Investigación inicial, que* ***comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente*** *y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e*

***b)*** *Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación;*

***II.*** *La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y*

***III.*** *La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento.”*

(Énfasis añadido)

1. La investigación de los hechos que revistan características de un delito podrá iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente cuando la ley lo exija. El Ministerio Público y la Policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia.
2. Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio, bastará para el inicio de la investigación la comunicación que haga cualquier persona, en la que se haga del conocimiento de la autoridad investigadora los hechos que pudieran ser constitutivos de un delito.
3. **Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la probable comisión de un hecho delictivo cuya persecución dependa de** querella o de **cualquier** otro **requisito** equivalente **que deba formular alguna autoridad, lo comunicará por escrito y de inmediato a ésta, a fin de que resuelva lo que a sus facultades o atribuciones corresponda**. Las autoridades harán saber por escrito al Ministerio Público la determinación que adopten[[1]](#footnote-1).
4. Cuando la denuncia sea presentada directamente ante el Ministerio Público, éste iniciará la investigación conforme a las reglas previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales[[2]](#footnote-2). Por otro lado, si la denuncia se presenta ante la Policía, ésta informará de dicha circunstancia al Ministerio Público en forma inmediata y por cualquier medio, sin perjuicio de realizar las diligencias urgentes que se requieran dando cuenta de ello en forma posterior al Ministerio Público[[3]](#footnote-3).
5. Por otro lado, existen dos formas de iniciar la investigación: de oficio y por querella. La primera, implica que el Ministerio Público inicie inmediatamente la investigación derivado de la *notitia criminis* en razón de su impacto y tipicidad; esto usualmente con la comisión de delitos graves.
6. Por su parte, la **querella** es la expresión de la voluntad de la víctima u ofendido o de quien legalmente se encuentre facultado para ello, mediante la cual manifiesta expresamente ante el Ministerio Público su pretensión de que se inicie la investigación de uno o varios hechos que la ley señale como delitos y que requieran de este requisito de procedibilidad para ser investigados y, en su caso, se ejerza la acción penal correspondiente[[4]](#footnote-4)
7. Ahora bien, la **cadena de custodia** es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación, en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión[[5]](#footnote-5).
8. Existirán tres formas de terminación de la investigación ajenos al ejercicio de la acción penal, a saber:
   1. *Facultad del Ministerio Público de abstenerse a investigar[[6]](#footnote-6): Cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente, no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad penal del imputado.*
   2. *Archivo temporal[[7]](#footnote-7). El Ministerio Público podrá archivar temporalmente aquellas investigaciones en fase inicial en las que no se encuentren antecedentes, datos suficientes o elementos de los que se puedan establecer líneas de investigación que permitan realizar diligencias tendentes a esclarecer los hechos que dieron origen a la investigación. El archivo subsistirá en tanto se obtengan datos que permitan continuarla a fin de ejercitar la acción penal.*
   3. *No ejercicio de la acción penal[[8]](#footnote-8): Previo a la audiencia inicial, el Ministerio Público, previa autorización del Procurador o del servidor público en quien se delegue la facultad, podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.*
9. Por cuanto hace a los datos de prueba, cualquier hecho podrá ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito. Las pruebas serán valoradas por el Órgano jurisdiccional de manera libre y lógica[[9]](#footnote-9).
10. Ahora bien, para la **audiencia inicial** del procedimiento penal, se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la **imputación**, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación[[10]](#footnote-10).
11. A fin de formular la imputación conforme a derecho, una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención y después de haber verificado el Juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley[[11]](#footnote-11).
12. La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso[[12]](#footnote-12).
13. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que[[13]](#footnote-13):
    1. *Se haya formulado la imputación;*
    2. *Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar;*
    3. *De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y*
    4. *Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito.*
14. El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento[[14]](#footnote-14). Antes de finalizar la audiencia inicial, el Juez de control determinará, previa propuesta de las partes, el plazo para el cierre de la investigación complementaria[[15]](#footnote-15).
15. Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince días siguientes deberá[[16]](#footnote-16):
    1. *Solicitar el sobreseimiento parcial o total;*
    2. *Solicitar la suspensión del proceso, o*
    3. *Formular acusación.*
16. La formal acusación por parte del Ministerio Público, iniciará la etapa intermedia del proceso, el cual tendrá por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio[[17]](#footnote-17).
17. De conformidad con lo establecido por el numeral 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la acusación deberá considerar los siguientes elementos:

*“****Artículo 335****. Contenido de la acusación Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación. La acusación del Ministerio Público, deberá contener en forma clara y precisa:*

***I.*** *La individualización del o los acusados y de su Defensor;*

***II.*** *La identificación de la víctima u ofendido y su Asesor jurídico;*

***III.*** *La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica;*

***IV.*** *La relación de las modalidades del delito que concurrieren;*

***V.*** *La autoría o participación concreta que se atribuye al acusado;*

***VI.*** *La expresión de los preceptos legales aplicables;*

***VII.*** *El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa de investigación;*

***VIII.*** *El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para probarlo;*

***IX.*** *La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita incluyendo en su caso la correspondiente al concurso de delitos;*

***X.*** *Los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la individualización de la pena y en su caso, para la procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la misma;*

***XI.*** *La solicitud de decomiso de los bienes asegurados;*

***XII.*** *La propuesta de acuerdos probatorios, en su caso, y*

***XIII.*** *La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso cuando ésta proceda.”*

1. Al inicio de la audiencia el Ministerio Público realizará una exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado por sí o por conducto de su Defensor; acto seguido las partes podrán deducir cualquier incidencia que consideren relevante presentar. La Defensa podrá promover las excepciones que procedan[[18]](#footnote-18).
2. Posteriormente, y una vez establecidos los acuerdos probatorios, el Juez se cerciorará de que se haya cumplido con el descubrimiento probatorio a cargo de las partes y, en caso de controversia abrirá debate entre las mismas y resolverá lo procedente[[19]](#footnote-19).
3. Finalizada la audiencia, el Juez de control dictará el auto de apertura de juicio que deberá indicar[[20]](#footnote-20):
   1. *El Tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio;*
   2. *La individualización de los acusados;*
   3. *Las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellas, así como los hechos materia de la acusación;*
   4. *Los acuerdos probatorios a los que hubieren llegado las partes;*
   5. *Los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada;*
   6. *Los medios de pruebas que, en su caso, deban de desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y de reparación del daño;*
   7. *Las medidas de resguardo de identidad y datos personales que procedan;*
   8. *Las personas que deban ser citadas a la audiencia de debate, y*
   9. *Las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado.*
4. Finalmente, la etapa de **juicio** será el periodo de **decisión** de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación en el que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad[[21]](#footnote-21).
5. Una vez recibido el auto de apertura a juicio oral, el Tribunal de enjuiciamiento deberá establecer la fecha para la celebración de la audiencia de debate, la que deberá tener lugar no antes de veinte ni después de sesenta días naturales contados a partir de la emisión del auto de apertura a juicio. Se citará oportunamente a todas las partes para asistir al debate. El acusado deberá ser citado, por lo menos con siete días de anticipación al comienzo de la audiencia[[22]](#footnote-22).
6. En el día y la hora fijados, el Tribunal de enjuiciamiento se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. Quien la presida, verificará la presencia de los demás jueces, de las partes, de los testigos, peritos o intérpretes que deban participar en el debate y de la existencia de las cosas que deban exhibirse en él, y la declarará abierta. Advertirá al acusado y al público sobre la importancia y el significado de lo que acontecerá en la audiencia e indicará al acusado que esté atento a ella[[23]](#footnote-23).
7. Abierto el debate, el juzgador que presida la audiencia de juicio concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga de manera concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que utilizará para demostrarla. Acto seguido se concederá la palabra al Asesor jurídico de la víctima u ofendido, si lo hubiere, para los mismos efectos. Posteriormente se ofrecerá la palabra al Defensor, quien podrá expresar lo que al interés del imputado convenga en forma concreta y oral[[24]](#footnote-24).
8. Cada parte determinará el orden en que desahogará sus medios de prueba. Corresponderá recibir primero los medios de prueba admitidos al Ministerio Público, posteriormente los de la víctima u ofendido del delito y finalmente los de la defensa[[25]](#footnote-25).
9. Concluido el desahogo de las pruebas, el juzgador que preside la audiencia de juicio otorgará sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al Asesor jurídico de la víctima u ofendido del delito y al Defensor, para que expongan sus alegatos de clausura. Acto seguido, se otorgará al Ministerio Público y al Defensor la posibilidad de replicar y duplicar. La réplica sólo podrá referirse a lo expresado por el Defensor en su alegato de clausura y la dúplica a lo expresado por el Ministerio Público o a la víctima u ofendido del delito en la réplica. Se otorgará la palabra por último al acusado y al final se declarará cerrado el debate[[26]](#footnote-26).
10. Inmediatamente después de concluido el debate, el Tribunal de enjuiciamiento ordenará un receso para deliberar en forma privada, continua y aislada, hasta emitir el fallo correspondiente. La deliberación no podrá exceder de veinticuatro horas ni suspenderse, salvo en caso de enfermedad grave del Juez o miembro del Tribunal[[27]](#footnote-27).
11. Concluida la deliberación, el Tribunal de enjuiciamiento se constituirá nuevamente en la sala de audiencias, después de ser convocadas oralmente o por cualquier medio todas las partes, con el propósito de que el Juez relator comunique el fallo respectivo[[28]](#footnote-28).
12. De acuerdo con lo establecido por el artículo 401 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el fallo que emita el Tribunal de enjuiciamiento deberá señalar:
    1. *La decisión de absolución o de condena;*
    2. *Si la decisión se tomó por unanimidad o por mayoría de miembros del Tribunal, y*
    3. *La relación sucinta de los fundamentos y motivos que lo sustentan*
13. Por cuanto hace a la redacción de las sentencias absolutorias y condenatorias, deberán atender lo establecido en los diversos 405 y 406 del Código Nacional Procesal de mérito, mismos que establecen lo siguiente:

*“****Artículo 405. Sentencia absolutoria***

*En la sentencia absolutoria, el Tribunal de enjuiciamiento ordenará que se tome nota del levantamiento de las medidas cautelares, en todo índice o registro público y policial en el que figuren, y será ejecutable inmediatamente.*

*En su sentencia absolutoria el Tribunal de enjuiciamiento determinará la causa de exclusión del delito, para lo cual podrá tomar como referencia, en su caso, las causas de atipicidad, de justificación o inculpabilidad, bajo los rubros siguientes:*

***I.*** *Son causas de atipicidad: la ausencia de voluntad o de conducta, la falta de alguno de los elementos del tipo penal, el consentimiento de la víctima que recaiga sobre algún bien jurídico disponible, el error de tipo vencible que recaiga sobre algún elemento del tipo penal que no admita, de acuerdo con el catálogo de delitos susceptibles de configurarse de forma culposa previsto en la legislación penal aplicable, así como el error de tipo invencible;*

***II.*** *Son causas de justificación: el consentimiento presunto, la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber, o*

***III.*** *Son causas de inculpabilidad: el error de prohibición invencible, el estado de necesidad disculpante, la inimputabilidad, y la inexigibilidad de otra conducta. De ser el caso, el Tribunal de enjuiciamiento también podrá tomar como referencia que el error de prohibición vencible solamente atenúa la culpabilidad y con ello atenúa también la pena, dejando subsistente la presencia del dolo, igual como ocurre en los casos de exceso de legítima defensa e imputabilidad disminuida.*

***Artículo 406. Sentencia condenatoria***

*La sentencia condenatoria fijará las penas, o en su caso la medida de seguridad, y se pronunciará sobre la suspensión de las mismas y la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la privación o restricción de libertad previstas en la ley.*

*La sentencia que condenare a una pena privativa de la libertad, deberá expresar con toda precisión el día desde el cual empezará a contarse y fijará el tiempo de detención o prisión preventiva que deberá servir de base para su cumplimiento.*

*La sentencia condenatoria dispondrá también el decomiso de los instrumentos o efectos del delito o su restitución, cuando fuere procedente.*

*El Tribunal de enjuiciamiento condenará a la reparación del daño.*

*Cuando la prueba producida no permita establecer con certeza el monto de los daños y perjuicios, o de las indemnizaciones correspondientes, el Tribunal de enjuiciamiento podrá condenar genéricamente a reparar los daños y los perjuicios y ordenar que se liquiden en ejecución de sentencia por vía incidental, siempre que éstos se hayan demostrado, así como su deber de repararlos.*

*El Tribunal de enjuiciamiento solamente dictará sentencia condenatoria cuando exista convicción de la culpabilidad del sentenciado, bajo el principio general de que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal de que se trate.*

*Al dictar sentencia condenatoria se indicarán los márgenes de la punibilidad del delito y quedarán plenamente acreditados los elementos de la clasificación jurídica; es decir, el tipo penal que se atribuye, el grado de la ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, así como el grado de lesión o puesta en riesgo del bien jurídico.*

*La sentencia condenatoria hará referencia a los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal correspondiente, precisando si el tipo penal se consumó o se realizó en grado de tentativa, así como la forma en que el sujeto activo haya intervenido para la realización del tipo, según se trate de alguna forma de autoría o de participación, y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta típica.*

*En toda sentencia condenatoria se argumentará por qué el sentenciado no está favorecido por ninguna de las causas de la atipicidad, justificación o inculpabilidad; igualmente, se hará referencia a las agravantes o atenuantes que hayan concurrido y a la clase de concurso de delitos si fuera el caso.”*

1. Establecido lo anterior, el Código Penal del Estado de México refiere lo siguiente:

***CAPITULO II***

***LOS DELITOS GRAVES***

***Artículo 9****.- Se califican como delitos graves para todos los efectos legales: el cometido por conductores de vehículos de motor, indicado en el artículo 61 segundo párrafo, fracciones I, II, III y V, el de rebelión, previsto en los artículos 107 último párrafo, 108 primer y tercer párrafos y 110, el de sedición, señalado en el artículo 113 segundo párrafo; el de cohecho, previsto en los artículos 129 y 130 en términos del párrafo segundo del artículo 131, si es cometido por elementos de cuerpos policíacos o servidores de seguridad pública; el de abuso de autoridad, contenido en los artículos 136 fracciones V y X y 137 fracción II; el de peculado, señalado en el artículo 140 fracción II; el de prestación ilícita del servicio público de transporte de pasajeros, señalado en el artículo 148 párrafo segundo; el de encubrimiento, previsto en el artículo 152 párrafo segundo; el de falso testimonio, contenido en las fracciones III y IV del artículo 156, el de evasión a que se refiere el artículo 160, el delito de falsificación de documentos, previsto en el artículo 170 fracción II, el que se refiere a la falsificación y utilización indebida de títulos al portador, documentos de crédito público y documentos relativos al crédito señalado en el artículo 174, el delito de usurpación de funciones públicas o de profesiones, previsto en el artículo 176 penúltimo párrafo, el de uso indebido de uniformes, insignias, distinciones o condecoraciones previsto en el artículo 177, el de delincuencia organizada; previsto en el artículo 178, los delitos en contra del desarrollo urbano, señalados en el primer y segundo párrafos del artículo 189, el de ataques a las vías de comunicación y transporte, contenido en los artículos 193 tercer párrafo y 195, el que se comete en contra de las personas menores de edad y quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, establecidos en el artículo 204 y 205, los contemplados con la utilización de imágenes y/o voz de personas menores de edad o personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho para la pornografía, establecidos en el artículo 206, el de lenocinio, previsto en los artículos 209 y 209 bis, el tráfico de menores, contemplado en el artículo 219, el de cremación de cadáver señalado en el artículo 225, el cometido en contra de los productos de los montes o bosques, señalado en los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto fracciones I, II y III del artículo 229; el deterioro de área natural protegida, previsto en el artículo 230, el de lesiones, que señala el artículo 238, fracción V, el de homicidio, contenido en el artículo 241, el de feminicidio, previsto en el artículo 242 bis, el de privación de la libertad de menor de edad, previsto en el artículo 262 primer párrafo, el de extorsión contenido en los párrafos tercero y cuarto del artículo 266; el asalto a una población a que se refiere el artículo 267, el de trata de personas, contemplado en el artículo 268 bis, el de abuso sexual, señalado en el artículo 270, el de violación, señalado por los artículos 273 y 274, el de robo, contenido en los artículos 290, fracción I en su primer y quinto párrafos, II, III, IV, V, XVI, XVII y XVIII y 292, el de abigeato, señalado en los artículos 297 fracciones II y III, 298 fracción II, y 299 fracciones I y IV, el de despojo, a que se refiere el artículo 308, en su fracción III, párrafos tercero y cuarto, y el de daño en los bienes, señalado en el artículo 311 y; en su caso, su comisión en grado de tentativa como lo establece este código, 314 bis, segundo párrafo, y los previstos en las leyes especiales cuando la pena máxima exceda de diez años de prisión.*

1. De lo anterior, no se observa que el delito de acoso sea considerado como un delito grave.
2. Es así que al no ser un delito grave, se concluye que **las sanciones por delitos no graves no serán públicas**, **así como las graves absolutorias**, en virtud de que dichas faltas, **no tienen una trascendencia social,** pues no existe un daño externo, sino que únicamente le atañe al servidor público en cuestión, en consecuencia no resulta dable ordenar su entrega y por el contrario, se ordena el acuerdo por el que se clasifique el pronunciamiento respectivo.
3. Asimismo, no pasa desapercibido que dentro de la solicitud de información se proporcionó el nombre del servidor público del cual se solicita la información, por lo que en atención a lo plasmado en líneas anteriores y en virtud de que el pronunciamiento por el **SUJETO OBLIGADO,** afectaría la esfera privada del o la particular, puesto que podría generar una percepción negativa de esta, ocasionando un perjuicio en su **honor, intimidad y buena imagen,** por lo que se concluye que dicha información, en caso de que existiera, **debe tener el carácter de confidencial,** razón por la cual, el **SUJETO OBLIGADO** deberá de emitir de manera fundada y motivada el Acuerdo del Comité de Transparencia mediante el cual clasifique el pronunciamiento de manera afirmativa o negativa por tratarse de datos que atañen a la vida privada de un particular.
4. Es por lo anterior, que en vista de que no se turnó a todas las áreas que pudieran generar, poseer y/o administrar la información, que se ordena que se turnar a todas las áreas que pudieran generar, poseer y/o administrar la información solicitada.
5. Al respecto, el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano constitucionalmente reconocido en consecuencia todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, funciones y atribuciones tienen la obligación de respetarlo, protegerlo y garantizarlo, así también **es su deber turnar la solicitud de información a todas las áreas dentro de su estructura orgánica que pudieran contar con lo solicitado**, a fin de dar cabal cumplimiento al derecho humano constitucionalmente reconocido.
6. En esa tesitura, el procedimiento de acceso a la información pública, descrito en el Título Séptimo de la Ley de Transparencia describe los pasos que debe seguir la autoridad para atender las solicitudes que presenten las personas en ejercicio de su derecho, entre los cuales se encuentra el deber de las Unidades de Transparencia de turnar a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, según se asienta en el artículo 162 de la ley citada.

***“Artículo 162.*** *Las unidades de transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.”*

1. El buscar exhaustivamente en sus archivos, es identificar la unidad(s) administrativa(s) que resguarda el documento al que una persona pretende acceder, es practicar una adecuada gestión documental que nos permite localizar el documento, como bien señala el artículo 159 de la Ley de Transparencia local.
2. De la normatividad en cita, se desprende que las Unidades de Transparencia, se erigen como el área responsable en cada Sujeto Obligado que tiene a su cargo la atención de las solicitudes de información que se realicen al amparo de la Ley.
3. El responsable de dicha área funge como enlace entre **EL SUJETO OBLIGADO** y los solicitantes, y tiene bajo su responsabilidad el tramitar internamente la solicitud de información.
4. De tal manera que, si bien, el Titular de la Unidad de Transparencia no tiene bajo su resguardo el archivo que contiene la documentación en donde consta la información solicitada, sino que pudiera obrar en las distintas áreas que conforman la estructura del **SUJETO OBLIGADO;** es por ello que, debe turnar la solicitud a todas las áreas que conforme a sus atribuciones y funciones generen, administren o posean la información requerida por la particular; pues tienen como función, buscar, localizar y poseer la información, así como entregarla.
5. Es así que, le corresponde al Titular de la Unidad de Transparencia el garantizar que las solicitudes se turnen a las áreas competentes que puedan contar con la información, con el objeto de que se realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la misma, atendiendo al referido dentro del presente proyecto de resolución.
6. Debido a lo anteriormente expuesto, este Instituto estima que las razones o motivos de inconformidad hechos valer por **EL RECURRENTE** devienen fundadas y suficientes para **MODIFICAR** la respuesta a la solicitud de acceso **01067/TOLUCA/IP/2024,** que origino el Recurso de Revisión **03348/INFOEM/IP/RR/2024**.
7. Así, con fundamento en lo previsto en los artículos 5, párrafo trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, fracción II, 29, 36, fracciones I y II, 176, 178, 179, 181, 185 fracción I, 186 y 188 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, este Pleno:

**RESUELVE**

**PRIMERO**. Resultan parcialmente **fundadas** las razones o motivos de inconformidad planteadas por **EL RECURRENTE**, en términos del Considerando **CUARTO** de la presente resolución.

**SEGUNDO**. Se **MODIFICA** la respuesta proporcionada por **EL SUJETO OBLIGADO** a la solicitud de información **01067/TOLUCA/IP/2024,** en términos del considerando **CUARTO** de la presente resolución y se **ORDENA** entregue al **RECURRENTE,** a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX)**, losiguiente:

* **Acuerdo del Comité de Transparencia mediante por el que se clasifique el pronunciamiento de la información a la solicitud 01067/TOLUCA/IP/2024.**

**TERCERO**. NOTIFÍQUESE la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado **vía SAIMEX**, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CUARTO.** De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el **SUJETO OBLIGADO** de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**QUINTO.** Notifíquese a **EL RECURRENTE** la presente resolución, **vía SAIMEX.**

**SEXTO.** Se hace del conocimiento del RECURRENTE que de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de México y Municipios, y en lo dispuesto en los artículos 159 y

160 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en caso

de que considere que la resolución le cause algún perjuicio podrá impugnarla vía

Recurso de inconformidad ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales, o bien, vía juicio de amparo en los

Términos de las Leyes aplicables.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS; MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA; SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ; LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA; EN LA CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL ONCE (11) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

1. Artículo 221, Ídem. [↑](#footnote-ref-1)
2. Artículo 224, Ídem. [↑](#footnote-ref-2)
3. Artículo 224, Código Nacional de Procedimientos Penales. [↑](#footnote-ref-3)
4. Artículo 225, Ídem. [↑](#footnote-ref-4)
5. Artículo 227, Ídem. [↑](#footnote-ref-5)
6. Artículo 253, Código Nacional de Procedimientos Penales. [↑](#footnote-ref-6)
7. Artículo 254, Ídem. [↑](#footnote-ref-7)
8. Artículo 255, Ídem. [↑](#footnote-ref-8)
9. Artículo 259, Código Nacional de Procedimientos Penales. [↑](#footnote-ref-9)
10. Artículo 307, Ídem. [↑](#footnote-ref-10)
11. Artículo 311, Ídem. [↑](#footnote-ref-11)
12. Artículo 315, Código Nacional de Procedimientos Penales. [↑](#footnote-ref-12)
13. Artículo 316, Ídem. [↑](#footnote-ref-13)
14. Artículo 318, Código Nacional de Procedimientos Penales. [↑](#footnote-ref-14)
15. Artículo 321, Ídem. [↑](#footnote-ref-15)
16. Artículo 324, Ídem. [↑](#footnote-ref-16)
17. Artículo 335, Idem. [↑](#footnote-ref-17)
18. Artículo 344, Código Nacional de Procedimientos Penales. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ibídem. [↑](#footnote-ref-19)
20. Artículo 347, Ídem. [↑](#footnote-ref-20)
21. Artículo 348, Código Nacional de Procedimientos Penales. [↑](#footnote-ref-21)
22. Artículo 349, Ídem. [↑](#footnote-ref-22)
23. Artículo 391,Ídem. [↑](#footnote-ref-23)
24. Artículo 394, Código Nacional de Procedimientos Penales. [↑](#footnote-ref-24)
25. Artículo 395, Ídem. [↑](#footnote-ref-25)
26. Artículo 399, Ídem. [↑](#footnote-ref-26)
27. Artículo 400, Código Nacional de Procedimientos Penales. [↑](#footnote-ref-27)
28. Artículo 401, Ídem. [↑](#footnote-ref-28)